

El examen europeo a la economía

ECONOMÍA

Pero las recomendaciones están ahí, y el viento podría volver a cambiar. En el caso español son calcaídas a las de otros años: junto a la ortodoxia en materia fiscal —que básicamente impediría a Rajoy cumplir con sus promesas electorales de bajar impuestos—, ortodoxia en el plano laboral. La Comisión pidió ayer "nuevas medidas" en el mercado de trabajo, como la reducción del número de tipos de contrato. Bruselas se atrevió incluso con un nivel de concreción inusitado en lo relativo a las prestaciones de paro: la Comisión recomendó "reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones". En otras palabras, retirar el subsidio a quien no acepte una oferta de trabajo.

Con el mismo lenguaje oscuro, Bruselas reclama que "la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo"; la Comisión se alinea así con el FMI en su petición de que los sueldos

Europa aconseja más rebajas de sueldos y reducir los tipos de contrato

España es uno de los países donde más crece la desigualdad

bajen más. Junto con eso, el Gobierno "tiene que acelerar la modernización de los servicios de empleo", "mejorar la eficacia de las políticas de empleo" y "poner en marcha cuanto antes la garantía juvenil", una medida financiada por Bruselas que persigue proporcionar un empleo o prácticas remuneradas a millones de 25 años que pierdan el empleo o dejen de estudiar.

El resto de consejos de la Comisión son los de siempre, los que se repiten en cada informe, en cada comparecencia pública, en cada declaración. Una miscelánea que incluye la eliminación del déficit eléctrico; la búsqueda de una solución al problema de las autopistas insolventes para minimizar los costes para el Estado; la aprobación de la ley de servicios profesionales, y la culminación de la reforma bancaria, entre otros asuntos. Aunque el informe deja también dos tirones de oreja mayúsculos. Uno, social: "A raíz de la crisis, España ha registrado uno de los mayores niveles de desigualdad de renta de la Unión"; el reparto de cargas, en fin, ha sido más injusto que en otros lugares. Y dos, político: Bruselas reclama "establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura". El estudio no cita los aeropuertos de Castellón o Murcia, la Ciudad de la Justicia de Madrid, el metro de Málaga, tantos otros casos. "Pero esos y muchos otros son los ejemplos que están detrás de esa recomendación", apunta una fuente europea.

Un año de gracia a Francia tras Le Pen

Bruselas opta por no apretar demasiado las clavijas a París

MIGUEL MORA, París

Tras el explosivo resultado de las elecciones europeas, y después de las protestas que François Hollande elevó el año pasado al recibir las recomendaciones de la Comisión Europea, Bruselas ha optado por ser prudente con Francia y no apretar más las clavijas al Gobierno socialista. La Comisión Europea expresa sus dudas acerca de los objetivos de reducción del déficit para este año y el próximo; dice que la estrategia francesa "es solo parcialmente conforme a las exigencias del Pacto de Estabilidad" (3% de déficit en 2015), y critica el "insuficiente nivel de detalle de las medidas" presentadas,

pero no reclama sanciones para París y concede *de facto* un año de gracia y el beneficio de la duda al Ejecutivo de François Hollande.

En todo caso, el diagnóstico de la Comisión sobre la economía francesa sigue siendo despiadado: crítica que los costes laborales siguen siendo demasiado altos, que la presión fiscal es superior a la de los países vecinos, que la reforma de las pensiones es insuficiente y que el sistema educativo, y esto es nuevo, está entre "los menos igualitarios del mundo".

La gran diferencia respecto a otros años es que, al comentar las conclusiones sobre Francia, que pactó con Bruselas un programa de recortes del gasto público de



François Hollande.

50.000 millones hasta 2017, Olli Rehn se mostró más diplomático de lo habitual. "Francia no respeta el objetivo porque nuestras previsiones de crecimiento son más débiles que la hipótesis de Francia para 2015, y porque las medidas nos parecen en este momento insuficientes", dijo. "Pero la situación de las finanzas públicas francesas no requiere de ulteriores comentarios en este punto". La impresión de que el ascen-

so meteórico de la extrema derecha en Francia puede haber pesado en el tono y el contenido de las recomendaciones fue evidente. Pero José Manuel Barroso, el presidente saliente de la Comisión, negó todo vínculo entre la victoria del Frente Nacional en los comicios y la infrecuente clemencia mostrada por los órganos fiscalizadores europeos. Barroso dijo que París había "anunciado las medidas estructurales bastante antes de las elecciones europeas", y añadió que la Comisión cree que "los objetivos de déficit son todavía alcanzables".

Barroso recordó también, más prudente que nunca, que las recomendaciones "se pactan con los países afectados en un diálogo permanente", y dijo que la Comisión "no impone nada". Hace solo un año, París había bramado contra la Comisión Europea acusándola de querer dictar la política económica a Francia; y la semana pasada, Hollande pidió a Bruselas "escuchar lo que ha pasado en Francia". Ayer, París expresó su "satisfacción".

Críticas a Berlín por la jubilación a los 63

La reforma complica la sostenibilidad de las pensiones, según Bruselas

LUIS DONCEL, Berlín

La ministra de Empleo alemana, la socialdemócrata Andrea Nahles, logró sacar adelante hace solo unas semanas una controvertida reforma que permite a los que lleven más tiempo trabajando jubilarse a los 63 años. Las críticas que le achacaban beneficiar a unos pocos a costa de los esfuerzos de generaciones futuras encuentran ahora eco en Bruselas. "Estas medidas, que deberán financiarse con una mayor contribución por parte de los trabajadores, añaden presión a la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas. Tendrá implicaciones negativas en la renta disponible de

la fuerza laboral activa", asegura el documento con las recomendaciones específicas a Alemania presentado ayer por los máximos responsables de la Comisión Europea, con su presidente, José Manuel Durão Barroso, a la cabeza.

Con este jarro de agua fría, Bruselas carga contra una de las reformas más importantes impulsadas por el Gobierno de gran coalición. Más cautos se muestran en la Comisión sobre otra de las medidas estrella del Ejecutivo alemán: el salario mínimo de 8,5 euros por hora que entrará en vigor el próximo año. Los economistas llevan tiempo recomendando a Berlín que tome medidas para impulsar su demanda interna. El sa-



Angela Merkel.

lario mínimo —que en un bando se ha criticado por tener demasiadas excepciones y en el contrario por ser demasiado generoso— requiere, según Bruselas, "un control muy detallado, sobre todo en su efecto sobre el empleo".

La Comisión tira de las orejas al equipo que capitanea la canciller Angela Merkel por no haber hecho lo suficiente por limitar la presión fiscal sobre el trabajo, sobre todo la que soportan los em-

pleados con salarios más bajos y por los progresos "limitados" para facilitar que los jóvenes que sobreviven con *mini-jobs* ocupen puestos de trabajo a tiempo completo y mejor remunerados.

Las recomendaciones se centran en medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas; reducir la presión fiscal, principalmente a las rentas más bajas, como forma de aumentar la demanda interna; y en estimular la competencia en los servicios. La Comisión se olvida así de los desequilibrios macroeconómicos —excesivo superávit comercial— que les llevó a abrir una investigación a Alemania a finales del año pasado. "El tamaño y la persistencia del superávit por cuenta corriente en Alemania merecen una atención muy detallada. La necesidad de reducir los riesgos de efectos adversos es particularmente importante dado el tamaño de la economía alemana", subrayaba la Comisión en marzo. Pero ahora en las recomendaciones no se mencionan estos desequilibrios.

Más tiempo para el Gobierno de Renzi

Europa libra del suspenso a Italia, pero insiste en el equilibrio de sus cuentas

LUCÍA MAGI, Roma

Tras la bendición de los italianos, que le atribuyeron el 40% de los votos en las elecciones europeas, al primer ministro Matteo Renzi le llega también el indulto, al menos temporal, de Bruselas. El comisario para la Economía, Olli Rehn, precisó que Roma sigue bajo su lupa porque "está experimentando desequilibrios económicos excesivos, considerando su alta deuda pública". Sin embargo, precisó que "no va a iniciar algún procedimiento" contra Italia, porque "su programa de reformas aborda de forma adecuada los re-

tos principales que identificamos en marzo". En apenas 100 días de Gobierno y con una campaña electoral de por medio, Renzi no tuvo tiempo de completar sus tareas. Lo importante para él era evitar el "suspenso" y ganar tiempo. Bruselas valora los esfuerzos, velará de forma estricta sobre los resultados de las acciones encaminadas y de las prometidas, pero aún no suspende al joven Ejecutivo de Renzi.

La Unión exige que este país miembro insista en medidas que fomenten el crecimiento, "sobre todo la racionalización del gasto público y el esfuerzo para un siste-



Matteo Renzi.

ma fiscal más eficiente", detalló el comisario. El titular de Economía, Pier Carlo Padoa-Schioppa, ve el vaso medio lleno: "La Comisión valora las reformas, ahora pisemos el acelerador contra la deuda", sentencia en la red social Twitter.

El documento de recomendaciones confirma lo que se atreaba en Roma: "En base a la evaluación del programa y de las previ-

siones de la Comisión, el Consejo opina que sirven esfuerzos añadidos, también en 2014, para respetar los requisitos del pacto de estabilidad".

La prensa nacional italiana que podría ser necesaria una modificación a la ley de presupuestos para encontrar 9.000 millones, antes de finales de año. Bruselas indicó varios caminos que explorar para llegar al objetivo de equilibrio de sus cuentas. Renzi debe reforzar la ley de presupuestos de 2014; desplazar la carga fiscal desde los factores productivos a los gastos y a los bienes inmuebles (Italia tiene impuestos sobre el trabajo muy altos); modernizar la Administración Pública; mejorar la eficiencia de los bancos; insistir en la reforma laboral; potenciar los servicios y los transportes y utilizar los fondos europeos de forma eficaz y transparente. Con una renovada fuerza interna y más credibilidad exterior, el Ejecutivo ahora no tiene que perder ni un segundo.